Hacia una economía-política interseccional del populismo: aportes críticos en torno a su forma articulatoria e instituyente

Rodrigo Adriel Iturriza*

ABSTRACT

Ernesto Laclau concibe al populismo como una lógica de articulación política. Para ello, retoma su trabajo con Mouffe, en el cual ambos trataron de dar cuenta de la construcción un nuevo sujeto político luego de la derrota del socialismo real. Así, desde el giro postfundacional, Laclau construye un entramado teórico que deja de lado, sin embargo, una de las dimensiones fundamentales de cualquier proceso político: sus cristalizaciones institucionales. Asimismo, debido a su intento de dar autonomía a lo político con respecto a lo económico, su perspectiva tiende a suspender el análisis de los condicionamientos socio-estructurales (no solo económicos) sobre el problema de la articulación política. Pero además, al obviar el tema de la construcción de la institucionalidad, deja de lado el análisis de su relación sobre diversas desigualdades sociales históricamente estructuradas e, incluso, intersectadas. El presente artículo tiene por objeto repensar ambas dimensiones del populismo: la articulatoria y la instituyente. En relación al primer asunto, el artículo trabaja el vínculo entre la profundización de la heterogeneidad social a raíz de un cambio en el régimen de acumulación y la lógica articulatoria populista. Desde allí se señala la posibilidad y pertinencia de enlazar el concepto de interseccionalidad al de articulación populista. Respecto a la segunda dimensión, se aborda el debate sobre la forma instituyente del populismo y su relación con los procesos emancipatorios desde ideas de una economía-política interseccional. Del artículo se desprende, en primer lugar, la posibilidad teórica de pensar la emergencia de un pueblo intersectado como sujeto político a partir de repensar el vínculo entre las demandas democráticas. En segundo lugar, se presentan dos líneas de investigación para abordar la potencia emancipatoria de una lógica instituyente populista en clave interseccional: el impacto de las instituciones populistas sobre diversas desigualdades imbricadas y la apropiación de estas instituciones por los subalternos para luchar contra su condición de dominación.

* Politólogo por la Universidad Nacional de La Matanza (Argentina) y Magíster de investigación en Sociología Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador). De Buenos Aires, Argentina, actualmente residiendo en Quito, Ecuador. Correo: rodrigo.adriel@live.com.ar.

PALABRAS CLAVE

Populismo; articulación política; instituciones; Estado; economía-política; interseccionalidad.

ABSTRACT

Ernesto Laclau construes populism as a logic of political articulation. For this, he takes the lead of his work with Mouffe, in which both tried to account for the construction of a new political subject after the defeat of real socialism. Thus, taking the so-called postfundational turn, Laclau constructs a theoretical framework that leaves aside, however, one of the fundamental dimensions of any political process: its institutional crystallizations. Also, due to his attempt to give autonomy to politics with respect to the economy, his perspective tends to suspend the analysis of socio-structural conditions (not only economic) on the problem of political articulation. Furthermore, by omitting the issue of institutional construction, his perspective leaves aside the analysis of its relationship with social inequalities historically structured and, even, intersected. This article aims to rethink both dimensions of populism: the articulatory and the instituting one. Regarding the first issue, the article works the link between the deepening of social heterogeneity, as a result of a shift in the accumulation regime, and the populist articulatory logic. From this follows the possibility and relevance of linking the concept of intersectionality to that of populist articulation. Regarding the second dimension, the debate on the instituting form of populism and its relationship with the emancipatory processes from the ideas of an intersectional political economy is addressed. The article reveals, first of all, the theoretical possibility of thinking about the emergence of an 'intersected people' as a political subject from a novel conceptualization of the link articulating different democratic demands. Second, two lines of research are presented to address the emancipatory power of a populist instituting logic in an intersectional key: the impact of populist institutions on various imbricated inequalities and the appropriation of these institutions by subaltern agents to fight against their condition of domination.

KEYWORDS

Populism; political articulation; institutions; State; political-economy; intersectionality

Introducción

Ernesto Laclau concibe al populismo como una lógica de articulación política. Para ello, retoma buena parte de su trabajo con Mouffe, en el cual ambos trataron de dar cuenta de la construcción un nuevo sujeto político luego de la derrota del socialismo real. Así, inspirado en el giro discursivo de las ciencias sociales y bajo el paradigma postfundacional, *La razón populista* construye un entramado teórico que deja de lado, sin embargo, una de las dimensiones fundamentales de cualquier proceso político: sus cristalizaciones institucionales.

Preocupado, asimismo, por jerarquizar la política e ir más allá de los postulados clasistas del socialismo derrotado por la democracia liberal y la economía de mercado, Laclau (2005; Laclau y Mouffe, 1987) rechaza la idea de determinación (económica) en última instancia, abriendo la puerta a la valoración de distintos antagonismos. Sin embargo, tal movimiento teórico, aunque potente, tiende a suspender la problematización de los condicionamientos socioestructurales (no solo económicos) en torno al problema de la articulación política. Pero además, al obviar el tema de la construcción de la institucionalidad, deja de lado el análisis de su relación sobre diversas desigualdades sociales (clasistas, sexo-genéricas, coloniales, territoriales, geopolíticas, etc.) históricamente sedimentadas e incluso conectadas o intersectadas.

En tal marco el presente artículo tiene por objeto reproblematicar en términos teóricos y políticos la construcción laclauviana sobre el populismo en torno a dos dimensiones: 1- la articulación del sujeto histórico y 2- la construcción de institucionalidad y su relación con los procesos de emancipación popular. En torno al primer asunto, en el primer apartado, se retoman las ideas de Laclau y de su obra con Mouffe en torno a la constitución del sujeto histórico. Luego, estas se relacionan con la literatura que problematiza el cambio del régimen de acumulación

y la profundización de la heterogeneidad social. En tercer lugar, frente a la consolidación del llamado neoliberalismo progresista, se aborda la posibilidad teórica y la pertinencia política de enlazar el concepto de interseccionalidad al de articulación populista. Respecto al segundo asunto, se aborda el lugar de las instituciones políticas en los procesos populistas. Luego, se avanza en el debate sobre la forma instituyente propia del populismo y su relación con los procesos emancipatorios. Finalmente, se trabajan ideas desde una economía-política interseccional a los fines de investigar la efectiva potencia emancipatoria de las instituciones populistas. El texto termina con una sistematización articulada de lo desarrollado en los apartados sobre cada dimensión reproblematicada.

La articulación del sujeto histórico

Claves teóricas del populismo como lógica articuladora: jerarquizando la política

En *La razón populista* (2005), Ernesto Laclau sostiene que el populismo constituye una lógica de articulación política específica. En su propuesta, el autor toma como unidad mínima de análisis el concepto de demanda social entendiéndola como una petición o reclamo. Según su perspectiva, cuando estas se multiplican se consolida ‘una creciente incapacidad del sistema institucional para absorberlas de un modo diferencial (cada una de manera separada de las otras) y esto establece entre ellas una relación equivalencial’ (Laclau, 2005: 98). Así, proliferan diversos reclamos que devienen equivalentes, a pesar de su heterogeneidad, por estar comúnmente excluidos de los arreglos institucionales. En este punto tendríamos la

incipiente formación de una frontera interna en la comunidad política ‘a través del surgimiento de una cadena equivalencial de demandas insatisfechas’ (Laclau, 2005. 99).

Ahora bien, las demandas no son todas iguales ya que las que permanecen ‘aisladas’, o particularizadas, Laclau las denomina como democráticas. Sin embargo, ‘a la pluralidad de demandas que, a través de su articulación equivalencial, constituyen una subjetividad social más amplia, las denominaremos demandas populares’ (Laclau, 2005, 99). Estas últimas serán los elementos principales, los ‘eslabones’, del sujeto popular.

Hasta aquí nos encontramos con dos precondiciones del populismo: la formación de una frontera interna antagónica que separa al pueblo del bloque de poder (nivel institucional diferencial) y una articulación de demandas que hace posible el surgimiento del ‘pueblo’. Existe, sin embargo, una tercera condición que emerge cuando la movilización política ha alcanzado un nivel más alto, a saber: ‘la unificación de estas diversas demandas (...) en un sistema estable de significación’ (Laclau, 2005: 99). En este momento se otorga sentido a esa articulación heterogénea, al tiempo en que se habilita la construcción de un enemigo.

Ahora bien, un pueblo también presenta, al interior de su cadena, una parte de sí, una demanda, que se vacía y adquiere (de forma contingente) el nombre y la representación del todo (Laclau, 2005). Al consagrarse una parte como encarnación/representación del todo, existe una tensión política fundamental al interior de la articulación: entre lo particular (es decir, lo que hace diferente a cada demanda) y lo universal (en la medida en que existe una demanda que expresa la relación equivalencial de todas las partes). ‘Por lo tanto’, afirma Laclau (2005: 124), ‘vamos a situar la identidad popular dentro de un complejo relacional que explica las condiciones tanto de su surgimiento como de su disolución’.

Es en esta complejidad que Laclau situará uno de los elementos que ciertas perspectivas han atribuido al populismo en un sentido peyorativo:

la vacuidad de su discurso. Lo vacío en esta perspectiva no es expresión de irracionalidad: es producto de esa misma heterogeneidad que se torna equivalente. Por tanto, Laclau propone tomar en consideración al nombre como el fundamento de la cosa (Laclau, 2005). Esto es, que el significante tenga independencia del significado. El momento de la nominación es, por tanto, un momento fundamental y fundacional para la configuración del pueblo, concentrándose en la figura del líder. El líder, de esta forma, constituye el punto de fijación de las heterogeneidades tanto en términos significativos como afectivos (Laclau, 2005).

Con todo, es preciso tener en cuenta que, para Laclau (2005: 137-138), ‘esta articulación entre universalidad y particularidad, que es constitutivamente inherente a la construcción de un ‘pueblo’, no es algo que sólo tiene lugar en el nivel de las palabras y las imágenes: también se sedimenta en prácticas e instituciones’. Vemos en esta idea cómo opera la noción de contaminación, ya que, si en un primer momento el populismo es disruptivo y contrario al momento diferencial (institucional) y se define por la equivalencia, esta última cita sugiere que dicha contraposición es ideal, pues la fijación nodal del momento de significación implica una institucionalización.

Ahora bien, matizando la idea de lo vacío en el momento de significación, Laclau también dará cuenta de los significados flotantes: ‘En ese caso, las mismas demandas democráticas reciben la presión estructural de proyectos hegemónicos rivales. Esto genera una autonomía de los significantes populares diferente de la que hemos considerado hasta ahora’ (Laclau, 2005: 165). La noción de significante flotante trata de problematizar, entonces, los desplazamientos en torno a la frontera antagónica y la tensión a la que se ven sometidas ciertas demandas particulares por parte de proyectos políticos contrapuestos. Y si bien ni lo vacío ni lo flotante se dan de forma pura, la introducción de esta preocupación deja más claro un escenario de disputa hegemónica.

Toda esta apuesta teórica retoma importantes elementos presentes en *Hegemonía y Estrategia socialista* (1987). Allí, Laclau y Mouffe, sostendrán que no existe un fundamento último que sobredetermine la totalidad de lo social. Por tanto, en contra del estructuralismo marxista ortodoxo, dirán que la práctica política (significante) no está sujeta a ningún fenómeno externo que la determine de forma necesaria. Pero esta operación para jerarquizar y autonomizar la política sobre la economía no implica necesariamente que lo económico o el contexto histórico no tengan un rol clave en estos procesos articulatorios. Lo que se quiere hacer notar es que no hay una dimensión que *a priori* pueda explicar el desarrollo universal de la historia. Más bien es en el ámbito de lo contingente, de lo político, dónde se debe buscar de forma contextualizada las diferentes luchas y cristalizaciones (o sedimentaciones) de lo social. En consecuencia, de la misma manera en que no hay fundamento último ni dimensión privilegiada para explicar la sociedad, tampoco hay un sujeto histórico exclusivo para una única lucha emancipatoria contra un enemigo determinado.

Los autores, sin embargo, no renuncian a pensar en un sujeto político que pueda transformar material e institucionalmente el orden social (que para Laclau será el pueblo). Por el contrario, buscan una alternativa para el nuevo proceso histórico que se abre con la consolidación de la derrota del socialismo real. Así, encuentran que el gran relato que puede inspirar a este sujeto es el de la Revolución Democrática. Descrita por Tocqueville, será esta la que explicará la imposibilidad de sostener cualquier orden diferencial jerárquico en desmedro del discurso igualitarista que introduce en la Historia (Laclau y Mouffe, 1987). Tenemos entonces, que el principio democrático de igualdad dará cuenta de configuraciones de sujetos históricos legitimados para evidenciar la arbitrariedad de toda jerarquización: de clase, sexogenérica, racial, etc. En definitiva ‘sólo a partir del momento en que el discurso democrático va a estar disponible para articular las diversas formas de resistencia a la subordinación, es que existirán las condiciones

que harán posible la lucha contra los diferentes tipos de desigualdad' (Laclau y Mouffe, 1987: 254).

En dicho marco, el intento de Laclau por dar cuenta de la racionalidad de la forma articuladora populista se desprende de los diagnósticos presentes en *Hegemonía y Estrategia Socialista*: la derrota del socialismo, de la creciente diferenciación socio-laboral y la consolidación de la política (del reconocimiento) de las diferencias en el contexto de la emergencia de los nuevos movimientos sociales. De hecho la inclusión y reinterpretación del problema de la hegemonía por parte de ambos autores en los años 80 obedece a tal diagnóstico. Ambos construyen su propuesta incluyendo, en sus palabras, la 'creciente proliferación de diferencias (...), por un lado, y, por otro, las dificultades que encuentra toda práctica que intenta fijar esas diferencias como momentos de una estructura articuladora estable' (Laclau y Mouffe 1985: 133).

En tal contexto histórico y al entender la forma relacional de toda identidad, postulan que no existen agentes sociales perfectamente constituidos en función de los intereses por los que luchan. Se está, por el contrario, frente a la dificultad de 'la dispersión y fragmentación de sus posicionalidades' (Laclau y Mouffe, 1985: 142). Así, la equivalencia se manifiesta como la forma articuladora -precaria y contingente- a partir de la cual el mundo social se objetiviza de una forma específica entendiendo la posibilidad de emergencia de diversos antagonismos. Por lo dicho 'las luchas democráticas (particulares) tienden cada vez menos a unificarse bajo la forma de luchas "populares"' (Laclau y Mouffe, 1985: 177) en tanto que 'las condiciones de la lucha política en el capitalismo maduro se alejan cada vez más del modelo del siglo XIX de una tajante "política de fronteras"' (Laclau y Mouffe, 1985: 177). De tal forma, si bien la disputa política no se desprende de la existencia 'empírica' de los actores, su forma está referida a un contexto histórico específico.

Con este diagnóstico de lo social y su concepción de la noción discursiva, el concepto de hegemonía toma sentido puesto que ‘es porque la hegemonía supone el carácter incompleto y abierto de lo social, que sólo puede constituirse en un campo dominado por prácticas articuladoras’ (Laclau y Mouffe, 1985: 177-178). Pero lo abierto sugiere que si bien la sociedad no tiene una construcción necesaria, tampoco es azarosa. Por tanto, es la política la que constituye una unidad precaria de un pueblo específico y

se expande en la medida en que se incrementa el carácter abierto, no suturado, de lo social. (...) Por eso la forma hegemónica de la política sólo se impone a comienzos de los tiempos modernos, en la medida en que la reproducción de las distintas áreas sociales se verifica en condiciones siempre cambiantes, que requieren constituir constantemente nuevos sistemas de diferencias -con lo que se amplía inmensamente el área de las prácticas articuladoras-. (Laclau y Mouffe, 1985: 182)

Hegemonía y heterogeneidad social, en consecuencia, van de la mano de la fijación de sentido mediante la práctica discursiva articuladora para la construcción del sujeto pueblo. De tal forma, ‘es preciso partir de una pluralidad de espacios políticos y sociales que no remiten a ningún fundamento unitario último. La pluralidad no es el fenómeno a explicar, sino el punto de partida del análisis’ (Laclau y Mouffe, 1985: 184).

La articulación política en contextos de heterogeneidad social: el lugar del régimen de acumulación postfordista

Como hemos visto, al analizar la apuesta teórica de *Hegemonía y estrategia socialista*, la configuración de los sujetos políticos refiere a procesos

históricos específicos. Por ello Laclau y Mouffe, a pesar de negar que lo económico explique necesariamente lo político, sostienen que su propuesta concibe a las sociedades signadas por una heterogeneidad -o diferenciación social- en expansión. Y este es un punto fundamental para conectar con las discusiones en torno a las transformaciones del régimen de acumulación.

Luego de la crisis de 1930, y aún con más fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial, la forma de organización del trabajo y la producción se organizaban bajo lo que distintos autores denominan como fordismo (Harvey, 1998). Se trata de un tipo régimen de acumulación que analíticamente ‘describe la estabilización en un largo período de la asignación del producto neto entre el consumo y la acumulación; implica cierta correspondencia entre la transformación de las condiciones de producción y las condiciones de reproducción de los asalariados’ (Harvey, 1998: 143-144).

El régimen fordista se caracterizaba por una forma de producción industrial, estandarizada, y masiva, concentrada en grandes fábricas urbanas que empleaban a un enorme número de trabajadores que ocupaban funciones especializadas por extensos períodos de tiempo (Harvey, 1998; Piore y Sabel, 1987). Por tanto, la posibilidad de construir grandes sindicatos se asentaba en las condiciones de socialización laboral, puesto que ‘la aglomeración de los trabajadores en las grandes fábricas siempre planteó la amenaza de organizaciones laborales más fuertes y mayor poder de la clase obrera’ (Harvey, 1998: 157). Y tal amenaza se acentuaba cuando existía cierta homogeneidad entre los intereses de la fuerza laboral (Harvey, 1998).

Ahora bien, ya para los años 70 y 80 dicho modelo comenzaba a tener problemas en relación a la acumulación del capital (Harvey, 1998). A través de un proceso complejo y no lineal, un nuevo régimen de acumulación se habría pasado en el marco de la derrota del socialismo real y de mano de las reformas de los gobiernos neoliberales: el postfordismo.

En este régimen se sucedió el surgimiento de nuevas relaciones de trabajo y de acumulación. Así, las fuerzas laborales -y sus intereses- comenzaron a dispersarse, fragmentarse y polarizarse, consolidándose un tipo de trabajo polivalente, relacionado con la necesidad de la rápida reconversión empresaria para ampliar los márgenes de ganancia (Harvey, 1998). Por otro lado, la deslocalización de la producción internacionalizó las dinámicas de reubicación de los capitales -en función de las mejores oportunidades en conseguir tasas de retorno- poniendo en cuestión la protección del trabajo y presionando a los Estados para flexibilizar el costo laboral expresado en derechos, políticas y cargas sociales:

En la medida en que la fuerte competencia internacional en una situación de lánguido crecimiento obligaba a todos los Estados a volverse ‘empresariales’ y a preocuparse por mantener un clima favorable a los negocios, debía limitarse el poder de los trabajadores organizados y de otros movimientos sociales (Harvey, 1998: 192).

Con el fenómeno de la reconversión de las empresas en función de los mercados cambiantes y segmentados –anclados en la valorización de la diferencia-, sumado a las desregulaciones y flexibilizaciones laborales, el empleo precario comenzó a extenderse, así como también comenzaron a afirmarse relaciones laborales menos estables y diversas (Harvey, 1998). Con todo, las condiciones de organización laboral fueron vulneradas y con ello, su poder de presión y las posibilidades de activar y encabezar procesos de acción colectiva (Harvey, 1998). De esta manera, la tendencia en el plano laboral es la de la reducción de núcleo duro clásico asalariado y la de ‘apelar cada vez más a una fuerza de trabajo que puede reclutarse rápidamente así como despedirse con la misma rapidez y sin costos cuando los negocios empeoran’ (Harvey, 1998: 175).

En este marco, las grandes corporaciones también reconfiguraron sus formas de hacer negocios y la subcontratación organizada ofrecía ‘oportunidades para la formación de pequeñas empresas y, en algunos

casos, permite que los viejos sistemas de trabajo doméstico, artesanal, familiar (patriarcal), y paternalista (...) revivan y florezcan como piezas centrales (...)’ (Harvey, 1998: 175-176). Esta es la condición de posibilidad fundamental para la creciente diferenciación de la fuerza laboral.

Por otro lado, los nuevos mercados de trabajo facilitaron tanto la explotación de la fuerza laboral de la mujer ‘sobre la base del horario de tiempo parcial, y así ellas, con remuneraciones inferiores, reemplazan a los trabajadores hombres’ (...), como ‘el renacimiento de la subcontratación y de los sistemas laborales familiares y del trabajo hecho en la casa’ (Harvey, 1998: 177-178). El punto aquí es que tal fuerza de trabajo comenzó a entrar al mercado y se generaron tensiones con otras formas de desigualdad (en materia de género en este caso particular).

Hasta aquí, entonces, la consolidación del régimen de acumulación postfordista tendencialmente debilitó a los trabajadores en calidad de constituirse como punto nodal de una construcción político-hegemónica emancipatoria. Y esto no solamente porque limitó su fuerza organizativa, sino porque reprodujo la diferenciación de sus intereses e identidades (en términos ‘empíricos’) con la consecuente presión hacia la consolidación de demandas democráticas.

Ahora bien, en simultáneo con las diferenciaciones en el mundo del trabajo, comenzaron a proliferar las disputas por derechos relacionados más con la cuestión del reconocimiento y no solo con la redistribución económica (como algo característico de los movimientos sociales clásicos durante el ciclo fordista). El postfordismo, aunque no de forma automática, lineal, ni necesaria, coincidiría con los procesos de lucha más relacionados con la demanda por reconocer las diferencias socio-culturales. Así, las nuevas problemáticas ‘particulares’, como las centradas en temas de género, diversidad sexual, etc., tendieron a tomar centralidad en clave de procesos democráticos, aunque no necesariamente populares (vía equivalencia).

Hasta aquí, en las mismas palabras de Laclau y Mouffe, no existe un divorcio entre condiciones sociales y constitución de los sujetos políticos, más allá de que la clave esté en el discurso como elemento de su estructuración. Pareciera ser que no todo discurso hace, o toma, sentido en cualquier tiempo histórico. Así, reflexionar sobre el rol fundamental y fundante de la práctica discursiva se relaciona directamente con la complejización -heterogeneidad- social porque incluso esta (1) genera el debilitamiento de la homogeneidad del mundo del trabajo con el consecuente debilitamiento en su capacidad de constituirse como punto nodal hegemónico, (2) tiende a diversificar sus intereses, y también (3) refiere a la proliferación de ‘nuevas’ demandas. La preocupación por la articulación hegemónica a partir de una diversificación de sentidos y posiciones de sujeto, toma su total relevancia histórica.

Ahora bien, se podría decir que el cambio del modo de acumulación tal y como fue descrito cabe más para el caso de los países del norte global. Sin embargo -y sin desconocer que América Latina no se mantuvo al margen de tales transformaciones en los años 90- el problema de la heterogeneidad social también es y fue propio de nuestra región. Al respecto, se ha reiterado que la dicotomización capital-trabajo nunca tuvo cristalización total y efectiva por estas latitudes. En tal marco, el problema del antagonismo de clase no encontraba un asidero acabado, tal y como señalan Laclau y Mouffe para los años 80. Al respecto fue Gino Germani (1971) quien habló de la heterogeneidad estructural en América Latina y, tal vez, ese sería uno de los puntos centrales para entender por qué en nuestra región se sucedieron los llamados populismos clásicos de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado.

En definitiva, es en el marco de ciertas condiciones sociales sedimentadas o estructuradas -con el foco puesto en el problema de la heterogeneidad y diferenciación social- que la lógica articuladora -vía equivalencia- toma sentido para construir un sujeto político -con capacidad

de disputa hegemónica-. La clave es, sin caer en un estructuralismo ortodoxo y determinista, considerar un nivel socio-estructural respecto del análisis y la investigación sobre la conformación del sujeto pueblo.

No es solo la economía: la articulación popular interseccional

A partir de lo dicho creemos que queda claro por qué Laclau, hacia fines del siglo pasado y principios del actual, hace foco en el problema de la articulación discursiva teniendo en cuenta la relación entre lo universal (equivalente) y lo particular (diferente) para la constitución de un nuevo sujeto político. El asunto está en su consolidación teniendo en cuenta el problema de la creciente diferenciación social (no solo laboral) y la expansión de la política orientada hacia las demandas de reconocimiento. Esto deviene problema académico (teórico), pero también de praxis política pues se evidencia un distanciamiento entre distintas formas, demandas y organizaciones subalternas, o, más específicamente las tensiones entre las luchas por el reconocimiento y la redistribución para construir una sociedad más justa (Fraser y Honneth, 2006) que se proyecta hasta nuestros días.

Cuando Laclau (2005) habla de la operación política sobre distintos significantes flotantes por parte de diversos proyectos políticos en disputa, explicita la lucha por orientar particularidades, o demandas democráticas, hacia una articulación específica -no siempre popular. Así, lo que se marca es el problema de la incorporación diferencial de distintas luchas contra diversas dominaciones sedimentadas que no alcanzan una proyección hegemónica.

En términos históricos, este diagnóstico (también presente en *Hegemonía*) parecería referir al problema ya sugerido por de Sousa

Santos: el de la relación entre los movimientos sociales ‘clásicos’ – obreros, campesinos, etc.- concentrados en la disputa por la distribución, *versus* los nuevos movimientos sociales, en tanto nuevos sujetos políticos orientados en la visibilización y erradicación de otras tantas formas de subalternidad (de Sousa Santos, 2001). Para estos últimos, los movimientos clásicos no solo que no tomaron en cuenta otras formas de subordinación -en términos de género, sexualidad, etc.- sino que con sus luchas y respectivas cristalizaciones institucionales han tendido a reproducirlas o profundizarlas.² No por nada estos nuevos sujetos se alejarían tanto del Estado -en plena reconfiguración neoliberal- como de aquellas formas organizativas que tendrían a minimizar sus demandas -o en todo caso a incorporar sus preocupaciones de manera subalternizada-.

Frente al fortalecimiento del neoliberalismo, la idea de *There is no alternative*, la no incorporación por parte de las organizaciones ‘clásicas’ de las demandas de ‘reconocimiento’ y la posterior deslegitimación de los partidos políticos por pactar un consenso al centro (Mouffe, 2014), los nuevos movimientos se replegarían sobre sí mismos, se encargarían de construir las condiciones de su autonomía y buscarían salidas particulares a sus demandas (de Sousa Santos, 2001). Sin embargo, y a pesar de su desconfianza hacia el Estado, el neoliberalismo lograría rearticular parte de sus preocupaciones, incorporando y resignificando de manera diferencial sus luchas.

Al respecto Nancy Fraser, en su interpretación sobre la victoria de Donald Trump en Estados Unidos habla de esto último como la consagración de un ‘neoliberalismo progresista’ (Fraser, 2017). Para ella se trata de

una alianza de las corrientes principales de los nuevos movimientos sociales (feminismo, antirracismo, multiculturalismo y derechos de

2 Al respecto se recomienda la lectura de Esping Andersen (2000), Martínez Franzoni (2007) y Martínez Franzoni y Voorend (2009) en torno a la consolidación de los Estados de bienestar y el fortalecimiento de o desinterés sobre formas patriarcales de opresión.

los LGBTQ), por un lado, y, por el otro, sectores de negocios de gama alta ‘simbólica’ y sectores de servicios (Wall Street, Silicon Valley y Hollywood) (Fraser, 2017: 2).

En este marco de articulación de ‘ideales como la diversidad y el ‘empoderamiento’, que, en principio podrían servir a diferentes propósitos, ahora dan lustre a políticas que han resultado devastadoras para la industria manufacturera y para las vidas de lo que otrora era la clase media’ (Fraser, 2017: 2). De tal forma, se consolida una visión sobre los nuevos sujetos políticos movilizados como parte de las élites globalizadas, y las emancipaciones de distinto orden sucumben ante los principios capitalistas de competencia y meritocracia. De tal forma, según Fraser, solo se deja el camino libre a las mujeres y sectores de la población LGTBI que están en condiciones de ascender en las empresas del capitalismo global.

En tal situación, cierto sector de la población, olvidado tanto en su dimensión de clase como en sus formas específicas de subordinación en otros órdenes, reacciona contra una articulación (el neoliberalismo progresista) que se apoya en cierto reconocimiento de la diferencia, pero dentro del esquema de la acumulación postfordista que desembocó en la crisis de 2008 y el crecimiento exponencial de las desigualdades materiales. De tal forma, resultó devastador ‘que se dejaran languidecer los potenciales vínculos entre el mundo del trabajo y los nuevos movimientos sociales’ (Fraser, 2017: 4).

Esta problematización es clave porque estas contradicciones continúan hasta nuestros días, a saber: el repliegue particularista de las demandas por reconocimiento y el descarte o subestimación de las luchas sobre diversas formas de subordinación por parte de los movimientos enfocados en la redistribución. Por ello, hoy no solo se trata de la construcción de un sujeto político en función de la heterogeneidad social y la relación entre lo particular y lo universal, sino también a partir de la noción de interseccionalidad.

En la teoría feminista, aunque con diversas derivas e implicaciones, ‘la interseccionalidad se ha convertido en la expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder’ (Viveros Vigoya, 2016: 2). Al concebir a las dominaciones como intersectadas se entiende que todo sujeto se ubica en distintas posiciones de subordinación frente a distintos órdenes de opresión (ser trabajador en la estructura capitalista, ser mujer lesbiana en la estructura heteropatriarcal, etc.). Sin embargo, el debate es acerca de si esas posicionalidades pueden ser abstraídas o si están fundidas entre sí. Al respecto Viveros nos dirá:

En algunas ocasiones, el género crea la clase, como cuando las diferencias de género producen estratificaciones sociales en el ámbito laboral. En otras, las relaciones de género son utilizadas para reforzar las relaciones sociales de raza, como cuando se feminiza a los hombres indígenas o se hipermasculiniza a los hombres negros; inversamente, las relaciones raciales sirven para dinamizar las relaciones de género, como cuando se crean jerarquías entre feminidades y masculinidades a partir de criterios raciales (Viveros Vigoya, 2016: 8).

De hecho, para visibilizar ‘la experiencia de las mujeres de color como grupo minoritario al interior del feminismo, el *black feminism* logró transformar su lucha estratégica en una perspectiva epistemológica que llevó a redefinir el sujeto político central del movimiento feminista’ (Viveros Vigoya, 2016: 13). De tal forma este giro permitió orientar el debate en torno a las fronteras externas del feminismo y consolidar ‘alianzas y solidaridades que se deben anudar con otros movimientos sociales que defienden los intereses de los grupos minoritarios’ (Viveros Vigoya, 2016: 13). La clave política de la crítica interseccional del feminismo negro está en la potencial construcción de una articulación sensible a distintas opresiones, sin dejar de lado las propias particularidades. Es en tal marco que no se trata solo de problematizar la condición de clase, es decir, no es solo la consagración de la economía postfordista lo que indica qué luchas articular. ‘En resumen,

estos distintos feminismos críticos han buscado construir un sujeto político universalizable y relacionarse con otros movimientos sociales sin tener que escoger entre las luchas de distintos movimientos sociales' (Viveros Vigoya, 2016: 14).

A todo esto, será Lugones (2005) quien se expresará de forma decidida por la construcción de una coalición/articulación política, de acuerdo a la potencia de la interseccionalidad, pero también en un sentido decolonial, es decir, en el sentido de un feminismo latinoamericano. Así, en su perspectiva, las mujeres de color como identidad de coalición buscan 'identificaciones que sean múltiples, inestables, situadas históricamente, a través de diálogos complejos desde dentro de la interdependencia de las diferencias no dominantes' (Lugones, 2005: 74) y desde allí construir resistencias y luchas comunes contra formas de opresión combinadas.

Teniendo esto en claro, recapitulemos. Para Laclau (2005) el problema central de la articulación política pasa por hacer equivalente lo diferente. Sin embargo, en su obra ya establece un punto de partida compartido para las demandas heterogéneas que le interesan: su común exclusión del sistema institucional. Esa es una precondition de la articulación equivalencial, la cual toma forma específica en función del contexto histórico determinado y del sentido estructurado. De tal forma, para Laclau toda demanda tiene dos dimensiones: una particular y una equivalencial. La primera representa su 'propia' identidad y la segunda lo que la hace equivalente con otras (el punto de partida de la construcción de un sujeto político universal, esto es, del pueblo).

Ahora bien, lo que parece hacer Laclau en su construcción teórica es suponer que toda demanda tiene un punto de partida particular. Además, al ser democrática se trata de una demanda particular que denuncia un orden jerárquico específico de dominación. Para poner un ejemplo, diríamos que la demanda por el aborto legal está orientada a limitar el lugar subordinado de la mujer en el marco del orden patriarcal. De tal forma, la segunda

condición para la articulación es la común subordinación de las demandas frente a diversos órdenes de dominación o, en palabras de Lugones (2005), las diferencias no dominantes (no solo de clase).

Si nos detenemos nuevamente en la construcción teórica del feminismo aquí citado -interseccional-, veremos que tales problemas teóricos y políticos (exclusión y subordinación en torno a diversos órdenes de dominación) son compartidos por la construcción laclauviana. Ahora bien, lo que aporta de específico la noción de interseccionalidad es que dichos órdenes de subordinación están imbricados. Así, y por más que su punto de partida para pensar este problema sea el feminismo, ha quedado claro que para la literatura interseccional la situación de clase o racial puede construir el género, de la misma manera que, en palabras de Viveros (2016), el género puede construir la clase. Es por ello que esta literatura sostiene la importancia de construir identidades y luchas políticas coalicionadas. La pregunta es, entonces, ¿cómo esta preocupación puede concretarse en torno a una lógica equivalencial, es decir, populista? La clave pasa por repensar la relación entre las demandas democráticas.

Como decíamos, todas las demandas tienen una particularidad pero también tienen en común su exclusión del sistema institucional y su lugar subordinado dentro de diversos órdenes. Partiendo de tal posicionamiento, la articulación equivalencial interseccional pasa por el hecho de que toda demanda incluya para sí una perspectiva que problematice un orden de exclusión desde el cual no haya partido, es decir, desde el cual no se haya constituido en reclamo (particular). Siguiendo con nuestro ejemplo, el aborto legal (así definido) constituye una demanda particular y democrática en tanto se opone al orden jerárquico de dominación patriarcal. Sin embargo, tiene una relación de equivalencia con otras demandas en tanto estas estén excluidas y refieran a una forma de subordinación. La clave de una articulación equivalencial interseccional pasa, por ejemplo, por el hecho de que la demanda por el aborto legal problematice para sí la

cuestión de la clase (entre otras posibles). De tal forma, la demanda ya no sería solo por el aborto legal, sino por el aborto legal y gratuito a los fines de que no solo las mujeres que puedan pagarlo accedan a un nuevo derecho, sino también las mujeres pobres. De tal forma, la demanda en cuestión retiene su particularidad y proyecta su universalización en tanto se expande a otros órdenes de dominación (intersectados). Desde cada lugar, un sujeto y una demanda se universalizan en tanto conciben para sí su relación en torno a diversos órdenes de dominación imbricados.

Esto último es clave en la medida en que la definición de la demanda implica: (1) la posibilidad de tender puentes con otros actores sociales que se preocupan por la reproducción de otros órdenes de dominación, (2) la forma específica de su realización material/institucional (no resumida solo en términos de redistribución o reconocimiento) y (3) la posibilidad de combatir -a partir de un lugar particular- la reproducción de diversas estructuras de subordinación y sus específicas imbricaciones. De tal forma, los distintos actores políticos y sociales que disputan sus demandas no solo estarían en condiciones de desarrollar vínculos empáticos entre sí, sino también de entender dónde se tocan las distintas formas de dominación para hacer confluir sus energías emancipatorias desde sus específicos lugares de lucha. De tal forma, la lógica interseccional de articulación implica otorgar sentido específico a cada una de las demandas que están excluidas del sistema institucional y subordinadas frente a diversos órdenes de dominación. La lógica interseccional de articulación equivalencial es la que hace posible la emergencia de lo que llamaremos, por tanto, pueblo intersectado, es decir un sujeto político universalizado en torno a su preocupación por la democratización de todos los órdenes de la vida. Su potencia hegemónica, universal, está en la pretensión de revertir la común situación de exclusión y subordinación que aqueja a distintos sujetos.

La lógica equivalencial de articulación y la noción de interseccionalidad no son, por lo señalado, antagónicas. Su confluencia

manifiesta una necesidad política por el hecho de que, por ejemplo, no todo aborto legal beneficia a toda mujer, sino a todas quienes pueden pagarlo. Una demanda, por tanto, puede solucionar una problemática pero tenderá a reproducir o invisibilizar problemáticas imbricadas a ella. En tal sentido, el aborto legal y gratuito, no solo aporta a la construcción de la autonomía de la mujer en general sino también de la mujer pobre, es decir, de la mujer sujeta a una condición (intersectada) de clase. De tal forma, nuevamente, actores históricos y contingentes serán los adversarios políticos comunes de un populismo interseccional: tanto el neoliberalismo progresista (al estilo de Macron) como el emergente neoliberalismo autoritario y conservador (de Bolsonaro). Así, en términos políticos concretos, el sujeto que de manera más efectiva pueda transversalizarse frente a toda particularidad y representarlas mediante la incorporación de sus sentidos frente a ambos enemigos será el que hegemonícamente encarne a ese pueblo intersectado.

Ahora bien, dicha forma articulatoria -como todas- buscará institucionalizarse a los fines de crear nuevos órdenes en términos económicos, sexo-genéricos, raciales, etc., pues es evidente que las múltiples demandas impulsadas por múltiples actores buscarán ser satisfechas (vía leyes, políticas públicas, derechos, etc.). De tal forma, antes de problematizar el asunto de las instituciones que den respuestas interseccionales a las luchas impulsadas por un sujeto político, y articuladas bajo la lógica, popular, debemos preguntarnos por el lugar de las instituciones (de la política de la diferencia) en los procesos populistas.

La construcción de institucionalidad y su relación con los procesos de emancipación popular

Las instituciones y el populismo

Hasta aquí hemos visto que para Laclau el populismo constituye una lógica articulatoria. Sin embargo, en sus escritos la cuestión de las condiciones sociales -aunque subproblematizada- no es abandonada. Más bien, la clave de su movimiento teórico en contra del estructuralismo está en evitar toda determinación automática y externa a la política y en jerarquizar distintas luchas contra diversas formas de dominación. Con respecto a esto último, queda claro por qué interesa hacer el esfuerzo teórico de acercar los postulados de la visión postfundacional del populismo y las perspectivas de la literatura interseccional latinoamericana. La articulación de las demandas de reconocimiento y redistribución sigue siendo un problema académico y de praxis política.

Ahora bien, dicho problema no se verifica solo en el nivel discursivo. También tiene su correlato respecto a la cristalización institucional de las diversas luchas por una sociedad más justa mediante implementación de políticas públicas, sanción de nuevas leyes, reconocimiento de diversos derechos, etc. De tal modo, también es preciso avanzar en la reflexión teórica sobre una dimensión de los procesos populistas que ha sido, cuanto menos, omitida por el giro postfundacional: su forma institucional-diferencial.

Respecto a este último asunto, se ha dicho que resaltar solo el momento de ruptura de la articulación populista deja en manos de la tradición liberal la problematización de las instituciones estatales (Cadahia y Coronel, 2018). En efecto, recordemos que para Laclau una de las condiciones de emergencia de la articulación popular está en la común exclusión de diversas demandas democráticas por parte de la institucionalidad. Esto tiene como correlato la conformación de una cadena equivalencial y la

dicotomización del espacio social y político. Frente a esta postura Aboy Carlés, en su texto *Las dos caras de Jano: acerca de la compleja relación entre populismo e instituciones* (2010), problematiza lo que Laclau, en un principio, parece ubicar en dos veredas distintas, es decir los fenómenos populistas y la institucionalidad política.

Siguiendo a Guillermo O'Donnell, Aboy Carlés sostendrá que una institución da cuenta de un patrón regularizado, practicado (lo que no implica que sea aprobado) por actores sociales que tienen la expectativa, al mismo tiempo, de seguir bajo ciertas reglas sostenidas por aquel patrón (2010). Con este insumo teórico aclara que 'resultaría pueril intentar desmentir a partir de la evidencia histórica la exclusión entre populismo e instituciones: hasta el propio liderazgo populista podría ser considerado una institución' (Aboy Carlés, 2010: 26).

Aboy Carlés pone de relevancia que nunca una articulación popular disolverá completamente a las instituciones políticas, y que estas no funcionan de manera tal de evitar cualquier proceso de equivalencia. Por otro lado, también es justo repetir que es el mismo Laclau quien reconoce que las lógicas de equivalencia y diferencia están mutuamente contaminadas (2005). Estos elementos invitan a pensar que el populismo configura instituciones específicas (además de no desarticular otras), tal y como demuestran las experiencias históricas latinoamericanas del pasado y presente siglo.

Al mismo tiempo, a partir de esta característica institucional que rescata del populismo, y de la relación entre lo particular y lo universal, Aboy Carlés argumenta que

el populismo se conforma como un mecanismo particular e incruento de gestionar la tensión entre la representación de una parte subalternizada de la comunidad y la representación de esa comunidad como un todo, y que, por esta misma razón, coexistirán en él tendencias a la partición comunitaria e intentos de recomposición y sutura de la propia fractura que su emergencia ha producido en

el seno de la comunidad. Es precisamente en virtud de este juego de partir e intentar recomponer la comunidad que se generan las oposiciones bipolares al populismo, al tiempo que su dinámica de exclusión/regeneración del campo adversario está en la base de esa figura tan paradójica, propia de diversas experiencias populistas, que conjuga la polarización social con la amplitud de su representación (Aboy Carlés, 2010: 29)..

Por lo tanto, si bien

Laclau acierta al señalar el papel central de la ruptura en la constitución del populismo, su contribución en cambio soslaya este aspecto de reintegración comunitaria que, aunque contradictorio muchas veces con el anterior, también es constitutivo de las experiencias populistas (Aboy Carlés, 2010: 28).

Con estos aportes nuestro autor defiende la importancia de dar cuenta de la institucionalidad en los procesos populistas. De hecho, recurriendo a la experiencia histórica del peronismo, cuyo emergente se explica por una ruptura de los sectores populares respecto del orden oligárquico que los excluía, Aboy Carlés se pregunta:

¿Acaso en la Argentina post 1943, la creación del fuero laboral con la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del sector patronal, no reforzaba precisamente la redención de esa plebs hasta entonces excluida y postergada? ¿Entre 1946 y 1955, una institución preexistente como la Presidencia de la Nación, que hasta entonces había defendido el *status quo*, no se convierte en impulsora de diversas reformas que lo ponen en cuestión? ¿A quién sirve el Estatuto del Peón? (2010: 33).

En definitiva, la pregunta clave pasa por la existencia de formas institucionales que reviertan el orden establecido a los fines de incorporar las demandas históricamente excluidas que dieron forma a la cadena equivalencial popular. De tal forma, la dimensión diferencial del proceso no es anti-política (Rancière 2010), es condición política de posibilidad de sedimentación, del reordenamiento de la comunidad, en torno a la satisfacción de los reclamos y necesidades de los excluidos. De tal forma,

antes que solo o mero desinstitucionalizador, el populismo también presenta una dimensión institucionalizadora o reinstituyente. La clave parece estar, en definitiva, en su intento por reordenar -y no solo desarticular- los términos de las relaciones sociales impugnados por su sujeto popular.

Instituciones y emancipación: la forma instituyente del populismo

Según lo dicho en el apartado anterior es posible avanzar hacia una reflexión que aborde la especificidad de la forma institucional o instituyente de los procesos populistas. Al respecto, la crítica de Cadahia y Coronel (2018) sugiere que tal forma se caracteriza por contribuir a la emancipación popular. En su texto *Populismo republicano: más allá de 'Estado versus pueblo'*, las autoras comienzan esta reflexión reconstruyendo el debate entre las tradiciones socialista-populista, primero, y autonomista-populista, después, 'con la finalidad de revisar el rol del Estado y las instituciones al pensar la emancipación y la autodeterminación popular' (Cadahia y Coronel, 2018: 72).

A su entender, el problema clave está en la forma de definir la noción de subordinación puesto que desde ese punto de partida 'se produjeron las principales tensiones entre el populismo y el socialismo latinoamericano de corte gramsciano' (Cadahia y Coronel, 2018: 73). De tal manera: 'mientras el socialismo identificaba el Estado como la forma originaria de la dominación capitalista, el populismo hacía de la forma estatal un espacio para la irrupción plebeya y un instrumento de conquistas populares' (Cadahia y Coronel, 2018: 74). Así, es evidente que, para cierta tradición socialista, el populismo devenga en un proyecto político que traiciona la emancipación popular *de clase*.

Frente a la crisis oligárquica de la primera mitad del siglo pasado, desde el punto de vista de la tradición socialista, el Estado solo recupera lo popular para reconstruirse y suspender toda potencia realmente transformadora. Tal lectura es válida ‘si el Estado es asumido como un tipo de poder monolítico y cerrado sobre sí mismo, una forma universal inmutable y destinada por naturaleza a la opresión’ (Cadahia y Coronel, 2018: 75). Sin embargo, si el Estado es considerado ‘como una producción social porosa, como el lugar donde los distintos actores políticos pugnan por darle forma para determinar su orientación institucional y los tipos de acumulación y distribución, entonces resulta más complicado asumir sin más esta dicotomía’ (Cadahia y Coronel, 2018, 75). En tal marco, la especificidad de la institucionalidad populista está dada por la construcción compleja, conflictiva y contradictoria entre Estado y actores -movimientos- sociales. De hecho, ‘si algo permite pensar el populismo es que el Estado no tiene por qué ser, en sentido estricto, una forma de enajenación, sino que puede convertirse en un modo de mediación de lo popular’ (Cadahia y Coronel, 2018: 75).

Siguiendo esta segunda idea, las configuraciones institucionales se encuentran en el centro del problema de la emancipación si estas propician una profundización de la democracia y logran mantener ‘viva la figura de un pueblo empoderado’ (Cadahia y Coronel, 2018: 77). En tales términos, agregan, es posible pensar una institucionalidad populista que no coincida con las formas oligárquicas ni liberal-europeas, en la medida en que se ponga en relación el populismo con la tradición republicana de pensamiento (como sugieren Carlos Vilas y Eduardo Rinesi) (Cadahia y Coronel, 2018).

Para lograr esto último, dicen las autoras, es preciso operar un movimiento analítico previo: diferenciar a un republicanismo oligárquico de uno plebeyo, tal y como sostiene Bertomeu (2005). El primero refiere a ‘la forma de gobierno que hace del derecho un mecanismo de conservación de privilegios. Es decir, una manera de restringir el campo de oportunidades

de los de abajo y de ampliar el sistema de privilegios de los de arriba' (Cadahia y Coronel, 2018: 78). En tal esquema, las instituciones perpetúan las desigualdades y operan como forma de dominación. Por otro lado, el republicanismo plebeyo habilita pensar a las instituciones 'en su dimensión igualitaria como el espacio propicio para la expansión de derechos y la desarticulación de la frontera material entre los de arriba y los de abajo' (Cadahia y Coronel, 2018: 78). De tal forma, es posible partir de la idea de que la lógica rupturista del populismo 'puede hacerse extensiva a una determinada forma de institucionalidad que combine dinámicas instituyentes de los gobiernos populares con decisionismo y movilización popular' (Cadahia y Coronel, 2018: 78).

Recordemos que el populismo en tanto que cadena de equivalencias, cuyas demandas tienen en común un momento de exclusión, traería consigo una impronta transformadora en base a la idea de inclusión. Esa idea puede implicar una multiplicidad de significados, de acuerdo a cada tipo de articulación populista. Pero lo que si podríamos decir es que, el populismo, por lo anterior, tiene un fuerte carácter inclusivo de la *plebs*, es decir, de la parte sistemáticamente olvidada por las instituciones. Por tanto, su dimensión institucional se caracteriza por la ampliación de la participación (no solo) política de sectores relegados de la sociedad. Es decir, prepararía las condiciones institucionales para la universalización de los principios de la Revolución Democrática: igualdad y libertad.

Así las cosas, como lo sugeriría Bertomeu (2005), las instituciones populistas -bajo el prisma del republicanismo plebeyo- constituyen la condición de posibilidad de la autonomización moral y material de los sujetos subalternos en relación a la dominación. Por tanto, es completamente fundamental reivindicar la gestión de Estado, suspendiendo cierta idea de que el momento institucional no constituye un momento político (Rancière, 2010). Pero más aún, la propuesta de Bertomeu implica retomar

el rol institucional de cara a las estructuras de dominación en tanto que, según ella, el republicanismo plebeyo implica universalizar la libertad republicana.

Tal idea de libertad consta de no depender de cualquier otro sujeto para la propia supervivencia en términos materiales. Así, es preciso asegurar la existencia autónoma universal para que todos devengan sujetos de derecho propio. Por lo tanto, la redistribución de la propiedad es el fundamento de la libertad republicana, *ergo* del ejercicio común del gobierno (Bertomeu 2005). De ahí que el republicanismo democrático, recuperado por Cadahia y Coronel, proponga institucionalizar la expansión de la propiedad -o de la igualdad de las condiciones materiales de existencias- con la consecuente universalización de la libertad política efectiva. De tal forma, son necesarios arreglos institucionales que garanticen las condiciones sociales de posibilidad de una vida material independiente y autónoma para todos (Bertomeu 2005). El populismo, entonces, como expresión del republicanismo democrático (a contraposición del oligárquico), al instituir los reclamos de la *plebs*, habilita la intervención pública legítima para asegurar el ingreso de los excluidos al ámbito político.

La forma instituyente populista, en definitiva, se distinguiría por construir formas institucionales que, tendencialmente, desarticulen la desigualdad material y propendan la democratización de las relaciones sociales. De tal forma, y si bien el trabajo de Bertomeu, recuperado por Cadahia y Coronel, se centra en la cuestión de la propiedad, la clave está también en pensar la relación de las instituciones populistas en torno a un amplio conjunto de formas de dominación sedimentadas. Como vimos, no solo hay razones económico-materiales en torno a los procesos exclusión, sino también sexogenéricas, raciales y de distinta índole, de ahí la importancia de incluir en esta problematización también el enfoque interseccional de la dominación.

La emancipación popular frente a múltiples dominaciones intersectadas a partir de las instituciones populistas

Lo dicho hasta aquí reintroduce el lugar de las instituciones, de la política de la diferencia, respecto de los procesos populistas. Pero también vimos que su forma instituyente se caracteriza por el aporte a los procesos de emancipación popular. Esta posibilidad nos invita a incorporar el problema de la dominación. Sea esta de clase, de género, de raza, dicha categoría –a su vez- nos lleva a reintroducir, nuevamente, el lugar de las estructuras sociales ya no solo en torno a la cuestión de la articulación político, sino también en relación con la potencia emancipatoria de las instituciones populistas. En términos de la sociología clásica, esto nos devuelve a una pregunta extensamente abordada: ¿en qué medida, hasta qué punto y cómo las instituciones políticas suspenden las múltiples desigualdades estructuradas? Rechazando la idea de determinación en última instancia del estructuralismo ortodoxo e incluyendo las distintas formas intersectadas de desigualdad, es preciso repensar este nivel analítico de manera más precisa.

En primer lugar, y según lo expresado hasta aquí, la noción de ‘estructura’ no puede referir a la idea de inmovilidad y sobredeterminación de toda dinámica social y política. Sin embargo, tampoco se puede partir de la idea del total voluntarismo y de una construcción social azarosa, más aún si nos preocupamos por el problema de la dominación y su sedimentación en el tiempo. En términos teóricos, entre el estructuralismo inmovilizador y el pleno voluntarismo, la propuesta teórica plateada por Sewell (2006) puede otorgar pistas importantes.

Dicho autor -desde una crítica a Giddens y Bourdieu- plantea una teoría de las estructuras sociales a partir de la cual también pueda pensarse la capacidad de agencia de los actores sociales y, por tanto, la ‘apertura’

del mundo social sujeta a todo proyecto hegemónico. De tal forma sostiene -con Giddens- que las estructuras son condición de posibilidad de la acción de los agentes/sujetos y las acciones de estos constituyen y reproducen las estructuras sociales.

En la perspectiva de Sewell, la agencia se piensa no de forma opuesta sino ‘como constituyente de la estructura. Ser agente significa ser capaz de ejercer cierto grado de control sobre las relaciones sociales donde nos hallamos inmersos, lo cual implica, entonces, la habilidad de transformar en cierto grado esas relaciones sociales’ (Sewell, 2006: 165). Esto nos permite pensar la agencialidad a partir y a pesar de los esquemas de estructuración de la vida social, es decir, a partir y a pesar de las condiciones sociales en un contexto histórico específico. Según tal perspectiva, no hay una idea de pleno ‘voluntarismo’ ni de un mundo social ‘azaroso’, pero tampoco la imposibilidad de pensar la existencia de sujetos que se constituyen a sí mismos y su orden social.

Ahora bien, rescatemos una expresión que tal vez pueda pasar desapercibida: Sewell habla de estructuras, en plural (de clase, de género, heteropatriarcal, étnica, etc.). Y esto es importante porque justamente la idea de que exista más de una forma estructurada de dominación hace un acercamiento analítico clave respecto de la posibilidad del cambio social, la articulación política interseccional y al problema de la determinación. Pero lo clave de su perspectiva, para nuestro trabajo, es que estas estructuras están conformadas por esquemas y recursos. La primera noción refiere al elemento que incluye los procedimientos de reproducción de la vida social que condicionan -no que determinan- el accionar de los actores en su contexto. Pero la segunda noción rescata que las estructuras sociales dotan -aunque de manera desigual- de recursos polisémicos a los actores -como medios para ejercer poder. En palabras de Sewell:

los agentes están dotados, por las estructuras, de poder para actuar con y contra otros; tienen conocimiento de los esquemas que contiene la vida social y también acceso en alguna medida a los recursos, tanto humanos como no humanos. La agencia surge del conocimiento que de los esquemas poseen los actores, lo cual significa la habilidad de aplicarlos a nuevos contextos. O, dicho de otro modo, la agencia surge del control de recursos por parte del actor, lo que significa la capacidad de reinterpretar o movilizar una serie de recursos en términos de otros esquemas que aquellos que constituían esa misma serie de recursos (Sewell, 2006: 165).

De tal forma, en el marco de la noción de las estructuras sociales en Sewell, tenemos tanto los potenciales condicionamientos -no determinantes- de la acción de los sujetos, y los recursos con los que estos cuentan para reordenar los términos de sus relaciones sociales.

Ahora bien, otra clave de esta construcción teórica es que las estructuras se superponen, esto es: que sus esquemas pueden ser transpuestos y que la acumulación de los recursos que ponen a disposición es imprevisible y utilizable en diversos conjuntos de relaciones sociales (Sewell, 2006). Así, desde las estructuras sociales, especialmente desde el uso de los recursos que ponen a disposición, se abre paso la posibilidad de la agencia de los sujetos y, por tanto, de su posible emancipación. En tal marco, es posible decir que no solo los dispositivos institucionales -como las leyes- son reversibles (Cadahia, 2017), sino también las estructuras sociales.

Desde este posicionamiento teórico, la reflexión en torno a la emancipación popular y a las instituciones populistas puede incluir una dimensión analítica enfocada en el problema de las dominaciones estructuradas. Este posicionamiento se justifica, además, en tanto entendemos que para Bertomeu la ampliación del margen de acción de los subalternos está en la democratización de las condiciones materiales de existencia, es decir, en la ruptura de las formas estructuradas de dominación económica. Al mismo tiempo, en la tradición del republicanismo plebeyo, la acción de Estado deviene problema político cuando se parte del supuesto

(confesado o no) de que el subordinado no puede, por sí solo, romper *del todo* sus propias cadenas.

Ahora bien, la reflexión sobre la posibilidad de que las instituciones populistas desarticulen las estructuras de dominación -o de desigualdad- intersectadas puede tener al menos dos caminos. Uno sociológico clásico y otro enfocado en los usos populares del derecho. El primero, como sugerimos anteriormente, ha sido trabajado a partir de la pregunta: ¿en qué medida, cómo y en qué condiciones las instituciones matizan las desigualdades materiales? En esta pregunta, sin embargo, y de acuerdo a lo tratado hasta aquí, importa el enfoque interseccional.

Esto último no es menor porque nos invita a abordar posibles impactos de las instituciones preparadas para abordar las demandas de redistribución económica, sobre dinámicas sexogenéricas o raciales de desigualdad. Una pregunta que podríamos hacernos es: ¿en qué medida las políticas de transferencia monetaria condicionada a mujeres de bajos recursos –para cuidar de sus hijos- les permite ser más autónomas en términos sexogenéricos? Además podríamos preguntarnos: ¿este impacto difiere respecto de mujeres de distintas edades, situadas en diversos territorios, etc.? Pero también, este enfoque nos ayuda a reflexionar sobre la construcción de dichas instituciones prestando atención a si estas han cristalizado más por el conflicto entre sectores subalternos, que por medio de una articulación intersectada de distintas demandas. A modo de ejemplo, si los sindicatos se preocupan por asegurar un sistema jubilatorio digno y universal y el feminismo se preocupa por la autonomía económica de las mujeres, es evidente que ambas demandas pueden articularse vía intersección cuando la población de la tercera edad -receptora de las políticas jubilatorias- se encuentra feminizada y ampliamente sujeta a la discrecionalidad de sus parejas varones.

De tal forma, respecto al problema de la emancipación, es preciso reflexionar en torno a los impactos de los arreglos institucionales sobre

distintas formas de desigualdad, siempre teniendo en cuenta cómo estas se estructuran. Pero también, y dado que en el centro de este debate tenemos el problema de la emancipación, otra entrada de abordaje la encontramos en la capacidad de los subalternos para hacer uso de las mediaciones institucionales populares. Claro está, incorporando también la importancia de los condicionamientos operados por las mismas estructuras de dominación en las cuales se encuentran. Ahora bien, si las estructuras condicionan las posibilidades de emancipación de los sujetos pero también los dotan de recursos (Sewell 2006), deriva la pregunta por el uso de los derechos, políticas, etc., en el marco de ciertas condiciones sociales y en conjunto con otros recursos.

La cuestión de la apropiación es importante también respecto a la reflexión por el día después de los derechos o políticas públicas para sus beneficiarios concretos. En efecto, hemos visto que la institucionalidad ocupa un lugar clave en los procesos populistas. Y si bien dichas instituciones pueden ser forjadas al calor de las luchas de determinados actores colectivos, es preciso robustecer el análisis respecto de cómo las personas que no participan de las distintas mediaciones organizativas hacen uso de ellas. Estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad que tienen los individuos de apropiarse de sus derechos y reordenar los términos de sus relaciones de poder cotidianas, teniendo en cuenta las condiciones sociales en las cuáles se mueven y las distintas posiciones de subordinación intersectadas que ocupan.

Esta última entrada no solo toma relevancia porque la inmensa mayoría de las personas no están ‘organizadas’, sino porque nos encontramos en un contexto histórico de creciente individualización y fragmentación social. Esto se vuelve aún más preocupante en el plano laboral, es decir, en el marco de las relaciones sociales en las que encontramos a trabajadores y trabajadoras sujetas a una desprotección de facto creciente (la economía de plataforma es un claro ejemplo). Si un sujeto político logra cambios

formales es preciso ver en qué medida, mediante su apropiación, dichos cambios operan realmente en la emancipación de aquellos que son sus beneficiarios.

En definitiva, no se trata tanto de afirmar o negar que la institucionalidad construida al calor de los procesos populistas es emancipadora. Se trata, más bien, de avanzar en una reflexión y agenda de investigación que con un enfoque de economía-política interseccional de la potencia emancipatoria de la forma instituyente populista analice: (1) su construcción bajo la lógica de la articulación intersectada, (2) el impacto de las instituciones sobre las dominaciones sociales y/o (3) su apropiación por parte de actores colectivos e individuales -en determinadas condiciones sociales que también facilitan recursos a ser movilizados- para enfrentar distintas formas estructuradas e intersectadas de subordinación. Por tanto, además del momento equivalencial, lo clave del populismo está en el debate sobre el cómo de su construcción instituyente-diferencial y en sus impactos y re-apropiaciones.

A modo de cierre

En este trabajo hemos visto que para Laclau, posicionado desde el giro postfundacional, el populismo constituye una lógica articuladora por medio de la cual distintas demandas heterogéneas devienen equivalentes. En tal proceso, cada particularidad no pierde su diferenciación, pero se enlaza en un sistema estable de significación común. Sin embargo, también se ha resaltado que esta lógica tiene sus raíces en sus reflexiones junto a Mouffe hacia los años 80. En *Hegemonía y estrategia socialista* tales autores sostenían que la política hegemónica –típica de la articulación que nos compete- solo es posible con un contexto de amplia heterogeneidad y

diferenciación social. Se trata, por tanto, de una condición socio-histórica específica.

Sin partir de un estructuralismo ortodoxo, que deviene en el inmovilismo y en la subordinación de la política a lógicas externas a ella, sostuvimos que tal condición socio-histórica se profundiza con el advenimiento del régimen de acumulación postfordista. Para el caso de América Latina, sin embargo, tal proceso se combinó con un diagnóstico previo: el de la heterogeneidad estructural. De hecho, de allí sugerimos que podía comprenderse la emergencia de los procesos populistas clásicos en este continente en la primera mitad del siglo pasado.

Al problematizar el lugar del cambio en el régimen de acumulación respecto del problema de la articulación política, intentamos jerarquizar la cuestión económica en esta dimensión del populismo. De tal forma, mostramos cómo la preocupación por hacer confluir lo múltiple en lo uno, en el nuevo sujeto histórico post-proletario, se relaciona con los condicionamientos socio-económicos de la época signada por el auge del neoliberalismo.

De tal forma, la creciente heterogeneidad de la fuerza de trabajo y sus intereses, así como también la creciente diferenciación social y la emergencia de las demandas por el reconocimiento de las particularidades socio-culturales, se situaba en un nuevo contexto en el que los ‘viejos’ y ‘nuevos’ sujetos políticos subalternos encontraban cada vez más diferencias entre sí. Los actores sociales ‘clásicos’ preocupados por el problema de la redistribución respecto de las desigualdades de clase, no encontraban mayor punto de contacto con los ‘nuevos’ actores que buscaban otras formas de emancipación frente a otras estructuras de dominación (de género, sexuales, raciales, etc.). En tal marco, cabe la idea de la posibilidad de que, en palabras de Laclau, distintos proyectos políticos hegemónicos se disputen estas demandas para procesarlas de manera diferencial.

Con dicha base, hemos introducido el diagnóstico de Fraser a propósito de la emergencia de lo que denomina como neoliberalismo progresista. Con su preocupación por acelerar las condiciones de la acumulación financiera, dicho proyecto incorpora y significa demandas específicas de los nuevos movimientos sociales para legitimarse y sostenerse. La sugerencia de la autora, por tanto, se centra en reconstruir los vínculos entre el mundo del trabajo y los nuevos movimientos sociales.

Es por ello que para este problema político, pero también para repensar en términos analíticos la articulación populista, hemos propuesto un elemento clave: la cuestión de la interseccionalidad. Apelando a esta categoría, y repensando el vínculo entre las demandas democráticas. Si bien estas cuentan con su específica particularidad, tienen en común su exclusión del sistema institucional y su lugar subordinado dentro de diversos órdenes de dominación. Partiendo de tal posicionamiento, la articulación equivalencial interseccional pasa por el hecho de que toda demanda incluya para sí una perspectiva que problematice un orden de exclusión desde el cual no haya partido, es decir, desde el cual no se haya constituido en reclamo (particular). De tal forma, los distintos actores políticos y sociales que disputan sus demandas no solo estarían en condiciones de desarrollar vínculos empáticos entre sí, sino también entender dónde se tocan las distintas formas de dominación para hacer confluir sus energías emancipatorias desde sus específicos lugares de lucha. La lógica interseccional de articulación equivalencial es la que hace posible la emergencia de lo que llamaremos, por tanto, pueblo interseccionado, es decir un sujeto político universalizado en torno a su preocupación por la democratización de todos los órdenes de la vida.

Ahora bien, también hemos señalado que el populismo no implica un momento de ruptura y solamente una lógica articuladora, sino también la construcción de instituciones, es decir, trae consigo el problema de la política en términos de incorporación diferencial de demandas. De

tal forma, el populismo reordena los términos del relacionamiento de la comunidad política mediante la incorporación de las demandas de quienes fueron históricamente excluidos. Así, podemos hablar, en términos teóricos, de una especificidad de la forma instituyente del populismo. Se trata del lugar de sus instituciones respecto de las posibilidades de la emancipación popular. En tanto el populismo, no como articulación sino como gobierno, deviene en una forma del republicanismo plebeyo, es posible entender sus cristalizaciones institucionales a los fines de asegurar las condiciones de autonomía moral y material de los subalternos.

No obstante esta posición teórica, la clave está en analizar e investigar la potencia emancipatoria de sus instituciones. Para dicha tarea, vimos que el debate se centra en el problema de la dominación. Por ello, como en el caso del problema de la articulación política, hemos recuperado el asunto de los condicionamientos sociales estructurados e intersectados que colocan a los actores en posiciones subalternas, limitando su autonomía. Sin embargo, para incluir este nivel analítico, operamos un movimiento teórico previo: pensar las estructuras sociales, también, como condición de posibilidad de la acción de los subalternos. De tal forma, las estructuras sociales, formadas por esquemas y recursos, condicionan al tiempo en que posibilitan el accionar de los subordinados.

De tal forma, finalmente, la clave de un enfoque de economía-política interseccional para estudiar la relación entre la institucionalidad populista y la emancipación popular pasa por incluir el nivel analítico estructural. Esto, especialmente, para dos agendas posibles de investigación. La primera, como dijimos, más clásica, que se preocupa por analizar los impactos de los arreglos institucionales sobre las estructuras intersectadas (de clase, de género, raciales, etc.) de desigualdad, y cómo esto desarticula la frontera material entre los dominantes y los dominados a los fines de asegurar ciertas condiciones de autonomía de estos últimos. La segunda se enfoca en la posibilidad de los subalternos -teniendo en cuenta sus

condiciones sociales- para la apropiación de las instituciones (derechos, por ejemplo) creadas en sus procesos de autonomización (en términos de clase, de género, de raza, etc.).

Bibliografía

- Aboy Carlés, G. (2010). Las dos caras de Jano: acerca de la compleja relación entre populismo e instituciones políticas. *Pensamiento Plural*, 7, 21-40.
- Bertomeu, M. J. (2005). Republicanismo y propiedad. *Sin permiso*. Disponible en: <http://www.sinpermiso.info/textos/republicanismo-y-propiedad>
- Cadahia, L. (2017). *Mediaciones de lo sensible. Hacia una nueva economía crítica de los dispositivos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Cadahia, L. y Coronel, V. (2018). Populismo republicano: más allá de 'Estado versus pueblo'. *Nueva Sociedad*, 273, 72-82.
- De Sousa Santos, B. (2001). Los nuevos movimientos sociales. En *OSAL*, 5, 177-184.
- Esping Andersen, G. (2000). *Fundamentos sociales de las economías post-industriales*. Barcelona: ARIEL-Sociología.
- Fraser, N. (2017). El final del neoliberalismo feminista. *Sin Permiso*. Disponible en: <http://www.sinpermiso.info/textos/el-final-del-neoliberalismo-progresista?fbclid=IwAR0VZUXz2ourolBck82DFrivIZGpBwFtwzY7vRK6XFSZ7m83OjfSEkTe9XM>
- Fraser, N. y Honneth, A. (2006) *¿Redistribución o reconocimiento?* Madrid: Morata.
- Germani, G. (1971). *Sociología de la modernización: estudios teóricos, metodológicos y aplicados a América Latina*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Harvey, D. (1998). *La condición de la posmodernidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Laclau, E. y Mouffe, C. (1987). *Hegemonía y estrategia socialista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Lugones, M. (2005). Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color. *Revista Internacional de Filosofía Política*, 25, 61-76.
- Martínez Franzoni, J. (2007). *Regímenes de bienestar en América Latina*. MADRID: Fundación Carolina-CeALCI.

- Martínez Franzoni, J. y Voorend, K. (2009). *Sistemas de patriarcado y regímenes de bienestar en América Latina ¿Una cosa lleva a la otra?* Madrid: Fundación Carolina-CeALCI.
- Mouffe, C. (2014). *Agonística. Pensar el mundo políticamente*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Piore, M. y Sabel, C. (1987). Capitalismo y producción en masa. *Investigación económica*, 46(181), 67-105.
- Rancière, J. (2010). *Momentos políticos*. Buenos Aires: Capital intelectual.
- Sewell, W. Jr. (2006). Una teoría de estructura: dualidad, agencia y transformación. *Revista Arxius*, 14, 145-176.
- Viveros Vigoya, M. (2016). 'La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación'. *Debate Feminista*, 52, 1-17.